

# ¿POR QUÉ PAGAR TRIBUTOS AL IMPERIO?

**(Respuesta a un legislador K que propone pagar la deuda pública con reservas, porque "es beneficioso para el país", y a quienes difunden esa lamentable propuesta).**

Luis Lafferriere - Programa Extensión "Por una nueva economía, humana y sustentable", Facultad de Cs. de la Educación - UNER 20-3-2012

Quienes conocen algo del tema de la deuda pública argentina no pueden ignorar cuestiones elementales acerca de su origen: qué se debe, por qué se debe y a quiénes se debe. Porque el tema ha sido estudiado, denunciado, y difundido ampliamente, y llama la atención que existan posturas que se suponen acordes a los intereses nacionales y populares que insistan en continuar pagando una deuda inexistente, odiosa, fraudulenta e ilegítima.

Se podría justificar que los acreedores (pirañas, buitres y piratas vestidos de banqueros) sigan insistiendo en cobrar intereses y capital por una deuda que en realidad la tienen ellos con el pueblo argentino. Pero es inconcebible que quienes deben defender los intereses de la Nación y de toda la sociedad, que han sido elegidos para representar al pueblo, y que son mantenidos con altas remuneraciones sacadas del esfuerzo de todos los argentinos, en lugar de cumplir con sus funciones se dediquen a gobernar al servicio de los saqueadores, traicionando a sus mandantes que los votaron.

Y también es lamentable que algunos argentinos confundidos se sumen a esa cuestionable acción, y difundan graciosamente una propuesta que además de entreguista es mentirosa.

La deuda pública argentina tiene en gran parte un origen ilícito y fraudulento, como bien lo demostró Alejandro Olmos y luego de un prolongado trámite judicial, lo corroboró con su sentencia el Juez Ballesteros (aunque no ha sido el único estudio, sino que abunda la información sobre deudas artificiales que se generaron con la última dictadura y se convalidaron y comenzaron a pagar durante los gobiernos democráticos).

Además, está el agravante de ser una deuda odiosa (y por lo tanto no debe pagarse), ya que según la jurisprudencia internacional cumple con los tres requisitos para considerarse como tal: asumida por un gobierno dictatorial, no fue usada en beneficio del pueblo o del desarrollo del país, y todo eso con el conocimiento explícito de quienes prestaron.

En el caso argentino, siendo una deuda fraudulenta y nula, ha sido pagada varias veces, y aún así cada año se suman 10 mil millones de dólares más de capital, aunque paguemos otro tanto de intereses a los usureros. Siendo nula en origen, no existe ningún instrumento posterior que pueda legalizarla.

Por esa razón, es indispensable que no se pague un peso más de deuda que no sea demostrada fehacientemente que es real y legal, y que se investigue y sancione a todos los funcionarios corruptos que la vienen pagando sin siquiera hacer una mínima auditoría de esas acreencias. Eso responde a derecho, y no tiene nada que ver con alguna pretensión "revolucionaria y delirante" que desconozca aún el marco legal impuesto por los sectores más concentrados del poder nacional y mundial.

Pero la pelea que vienen protagonizando quienes representan a diferentes fracciones del capital concentrado y sólo se disputan su rol de capataces para administrarles sus intereses, no pone en debate la legalidad de la deuda y su origen. Sólo se pelean para ver con qué recursos pagar la deuda. Unos dicen con las reservas (por eso se preocupan para que haya dólares sólo para eso, y toman todo tipo de medidas para garantizarlo) y otros dicen gastemos menos para tener más margen.

Es decir, los cipayos se pelean por cumplir con las órdenes de los amos usureros, a costa siempre de sacar recursos indispensables para mejorar las condiciones de vida de la gente. Hoy se están haciendo ajustes (llamados pomposamente 'sintonía fina'), que deben pagar los argentinos a través de mayores tarifas, más impuestos, precios más elevados, etc. Claro que como se trata de un ajuste 'nacional y popular' pretenden que no se los cuestione.

Pero en última instancia, las dos posturas enfrentadas desde el poder económico y político se ponen de acuerdo en lo esencial: que a los usureros hay que pagarles, a costa del sacrificio del pueblo argentino.